

# **EL ACUSADOR PRIVADO EN EL PROCESO PENAL ABREVIADO EN COLOMBIA: REFLEXIONES A PARTIR DE SU ALCANCE NORMATIVO.**

Luz Andrea Hincapié Correa<sup>1</sup>

## **RESUMEN**

En el presente ensayo reflexivo se aborda la figura del acusador privado en el proceso Penal abreviado, a partir de aspectos normativos, funcionales y prácticos, para determinar su grado de apropiación en Colombia.

Teniendo en cuenta lo anterior, se presentarán los resultados del análisis de este asunto a partir de: (i) los debates llevados a cabo en el Congreso de la República sobre la aprobación de la Ley 1826 de 2017; (ii) los antecedentes del Proceso Penal Abreviado en Colombia, junto a las figuras análogas desarrolladas en otros países donde se adopta el modelo procesal iberoamericano; y (iii) la jurisprudencia producida por la Corte Suprema de Justicia sobre la ley ya mencionada. Este ejercicio apunta a precisar de manera objetiva, los elementos que se presentan en la implementación de la acusación privada, como una configuración asertiva del sistema penal acusatorio ordinario.

Cuya finalidad es la de contribuir a la protección del derecho al acceso a la administración de justicia en los asuntos penales que involucren los delitos descritos taxativamente señalados, en el articulado de la Ley 1826 de 2017.

---

<sup>1</sup> Abogada y especializando en Derecho Procesal, Probatorio y Oralidad. Universidad Libre Seccional Pereira lahincapie@hotmail.com

***PALABRAS CLAVES:*** Proceso Penal Abreviado, Conversión Acción Penal, Acusador Privado, Sistema Penal Acusatorio, Acceso a la Justicia.

## **ABSTRACT**

This thoughtful trial addresses the figure of the private accuser in the abbreviated criminal proceedings from normative, functional and practical aspects, to determine its degree of appropriation in Colombia.

In the light of the above, the results of the analysis of this case shall be presented on the basis of:(i) the discussions held at the Congress of the Republic on the passage of Law 1826 of 2017;(ii) the background to the Abbreviated Criminal Process in Colombia, together with similar figures developed in other countries where the Ibero-American procedural model is adopted; And(iii) the jurisprudence produced by the Supreme Court of Justice on the aforementioned law.

This exercise aims to objectively clarify the elements presented in the implementation of the private indictment as an assertive configuration of the ordinary criminal prosecution system

The purpose of which is to contribute to the protection of the right to access to the administration of Justice in criminal matters involving the crimes described exhaustively, in the articulation of Law 1826 of 2017.

***KEYWORDS:*** Abbreviated Criminal Process, Conversion of Criminal Action, Private Prosecutor, Accusatorial Criminal System, Justice Access.

## INTRODUCCIÓN

Una de las reformas procesales más recientes en el ámbito penal, puntualmente al Sistema Penal Acusatorio que se instituyó en Colombia mediante la Ley 906 del 2004; es la conversión de la acción pública en privada, por medio de la figura del acusador privado descrita en la Ley 1826 de 2017, la cual establece el Proceso Penal Abreviado en Colombia.

Es por ello, que para realizar un estudio significativo sobre la apropiación de la figura del acusador privado en Pereira, se hace necesario profundizar en las motivaciones del legislador el cual estableció que la adopción de este modelo, incide positivamente en la política criminal, destacándose la delimitación taxativa de las conductas punibles que se podrán adelantar por medio de este proceso especial.

La titularidad de la acción penal, sigue perteneciendo a la Fiscalía General de la Nación, y su conversión es facultativa a ella debido a que se encuentra enmarcada dentro de unos criterios definidos en la misma Ley y conservando esta institución, la competencia en ejecución de actos urgentes y complejos.

Bajo este entendido, en el Proceso Penal Abreviado, se establece casi que simultáneamente un procedimiento interno, para garantizar un control de la conversión y revisión penal; por medio de la Resolución 2417 de 2017, expedida por la Fiscalía General de la Nación, cuya finalidad es la descongestión del sistema judicial, permitiendo el acceso a la administración de justicia bajo los principios de celeridad, economía procesal y el respeto de los derechos fundamentales de las partes.

Con lo anterior, se hace necesario avanzar en el estudio de las ventajas y desventajas de la conversión de la acción penal y estipulaciones que crean límites en el ejercicio de esta

figura; para generar así un aporte teórico acorde a la realidad, encaminado a mejorar la implementación del modelo, a partir de los aspectos positivos ya estructurados en la Ley.

### **1. La figura del acusador privado en el Proceso Penal Abreviado y el Estado social de derecho.**

A partir de la Constitución Política de 1991, en Colombia se busca garantizar el respeto por los derechos fundamentales de cada individuo, por medio de mecanismos y procedimientos legales eficaces. Sin embargo, para efectos de este trabajo, la atención se centró únicamente a los avances desarrollados en la política criminal, creados como instrumentos para solucionar, prevenir y controlar el alto grado de criminalidad que siempre ha existido en este país.

Con el fin de disminuir los índices de delincuencia, el sistema penal siempre ha estado en constante modificación. Una muestra de ello, lo constituye el paso de un sistema de tendencia inquisitiva a un modelo procesal acusatorio, aprobado por medio de la Ley 906 de 2004. En su implementación, este nuevo modelo ha sido considerado una utopía, pues, una de las problemáticas más grandes que actualmente afronta el Sistema Penal Acusatorio colombiano, es la congestión judicial y la falta de celeridad en los procesos asignados a los diferentes despachos judiciales; generando entre la sociedad una impresión de impunidad y en consecuencia una violación a su derecho de acceso a la administración de justicia.

Para tratar de contrarrestar esta problemática, específicamente en conductas punibles consideradas como delitos de menor lesividad y contravenciones, el legislador expidió la Ley 1826 de 2017, no como una solución absoluta, pero si como un avance significativo en esta rama del derecho, puesto que la ley antes mencionada, según Balcázar, L. (s.f.), “Se

erige, como un instrumento de descongestión judicial, haciendo que el procedimiento para resolver los procesos en determinados delitos sea más rápido y corto, permitiendo así, (...) impactar fuertemente y de manera positiva buscando que la administración de justicia sea más efectiva”. (Pág. 2,5.)

Actualmente el sistema penal acusatorio, con el fin de hacer cada vez más eficiente el aparato judicial y hacer efectiva la administración de justicia para todos los individuos de la sociedad, y con fundamento en el artículo 13 de la Constitución Política se establece que es una obligación del Estado promover “condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados” (Presidencia de la República. 1991).

Se entiende que el modelo procesal acusatorio fue establecido alineado a los principios de la política criminal, en el marco del modelo de Estado Social de Derecho, es decir aquel:

Estado que garantiza estándares mínimos de derechos tales como el salario, la alimentación, la salud, la vivienda digna, la educación, asegurados para todos los ciudadanos (...) y que garantiza, además, nuevos valores-derechos que han sido consagrados por la doctrina como la segunda y tercera generación de derechos humanos y que se manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de democracia participativa, de control político y jurídico en el ejercicio del poder y sobre todo, a través de la consagración de un catálogo de principios y de derechos, (...) entendidos como derechos fundamentales que inspiran toda la interpretación y el funcionamiento de la organización política. (Ramírez, J. 2019)

Buscando ser un sistema garantista, sujeto a prácticas jurídicas que promuevan la eficacia en la administración de justicia, entendiendo la misma no como la producción desmedida de tipos penales, sino como la elaboración simultánea de procesos y

mecanismos que le permitan tanto a las víctimas de conductas de mayor punibilidad como a las de menor lesividad, accionar al aparato judicial y así obtener la protección de sus derechos fundamentales.

Lo anterior, es un ideal que no ha sido fácil de alcanzar, porque es evidente la discordancia entre las estipulaciones teóricas con la realidad procesal en materia penal que ha vivido y vive actualmente el Sistema Penal Acusatorio colombiano; por ello como una solución a esta problemática específicamente con relación a la conductas de menor lesividad, el legislador expidió la Ley 1826 de 2017 *Por medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado*.

## **2. Antecedentes normativos Ley de 1826 de 2017.**

Para defender la asertividad que tuvo el legislador, al incorporar la acusación privada como un mecanismo que contribuya a la descongestión judicial y consecuentemente al acceso a la administración de justicia, es importante conocer de donde proviene este modelo procesal iberoamericano; puesto que, es una figura que ha sido instituida en otros países y ha permitido de manera eficiente alcanzar el objetivo con la cual fue instaurada en los sistemas procesales de los mismos.

Asimismo, para garantizar la constitucionalidad de esta figura en Colombia, someramente se mencionará el marco jurídico que antecedió a la Ley 1826 de 2017, partiendo desde la misma Constitución Política; para finalmente describir la motivación expuesta en los debates llevados a cabo por el Congreso de la República, la cual permitió aprobar la conversión de la acción penal pública a privada, por medio de la figura del acusador privado.

### 3. Figuras análogas en otros países.

Al indagar sobre esta figura, Mendoza, D. (2018) describe, que en países como Chile, Perú, Costa Rica, Estados Unidos e incluso España, se empezó a implementar este modelo como las que se relaciona a continuación:

**Tabla 1. Alcance del acusador privado en perspectiva comparada.**

País	Alcance
Chile	<p>En el sistema penal acusatorio chileno, por regla general corresponde al Ministerio Público ejercer la acción penal, sin embargo, se reconocen tres tipos de querellantes diferentes a este, los cuales son:</p> <p><b>-Conjunto adhesivo:</b> Directamente perjudicado, quien colabora de manera accesoria al Ministerio Público.</p> <p><b>-Conjunto autónomo:</b> Cuenta con atribuciones similares otorgadas al Ministerio Público, es decir, que si este último no ejerce la acción penal, lo puede hacer por sí solo, puesto que cuenta con autonomía formal y material, lo que consecuentemente convierte la acción pública en privada.</p> <p><b>-Privado:</b> Por medio del cual se da una absoluta privatización de la acción penal, pero con ciertas limitaciones, en palabras de Mendoza, D. (2018)</p> <p style="padding-left: 40px;">Se plantea en aquellos casos en que el componente del interés privado prevalece sobre el interés público al castigo, lo que permite la autonomía de la voluntad y el poder de decisión del ofendido jueguen un papel preponderante en el inicio, desarrollo y desenlace del procedimiento.</p>
Perú	<p>En el Código Penal Procesal, se establece un sistema acusatorio garante, el cual consta por regla general de un trámite común para los delitos que en él están estipulados, pero excepcionalmente instaure procesos especiales; entre ellos, el proceso por delito de ejercicio privado de la acción penal, por medio del cual se juzgan las faltas (delitos son medida privativa de la realidad) establecidas en los artículos 441 al 451 del Código Penal. En este proceso es el directamente afectado quien ejerce la acción penal, sin que intervenga el Ministerio Público.</p>
Costa Rica	<p>En el Código Procesal Penal la acción penal privada es ejercida por el directamente afectado, en la ocurrencia de delitos menores descritos en su artículo 19. Sin embargo, no es una figura autónoma, puesto que el artículo 72 de este código establece que:</p> <p style="padding-left: 40px;">La acción pública podrá convertirse en privada a pedido de la víctima (toda persona con capacidad civil que se pretenda ofendida por un delito de acción privada), siempre que el Ministerio Público lo autorice y no exista un interés público gravemente comprometido, cuando se</p>

	<p>investigue un delito que requiera instancia privada o un delito contra la propiedad realizado sin grave violencia sobre las personas. Si existen varios ofendidos, será necesario el consentimiento de todos.</p> <p>Adicionalmente, se encuentra determinada por los aspectos que se enuncian a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Solo se aprobará la conversión de la acción pública a privada y esta pueda ejercerse, el directamente afectado debe actuar por medio de un abogado.</li> <li>-Se debe solicitar el auxilio judicial cuando al querellante le sea imposible la realización del arraigo de quien vulnera sus derechos, entre otras circunstancias.</li> <li>-La conversión es en cuanto a la acción y al delito, dado que, el cambio es sobre el que ejerce y no sobre la conducta que está estipulada taxativamente en el código.</li> </ul>
España	<p>Constitucionalmente, la figura del acusador privado tiene una función garantista, puesto que, en el ámbito penal proviene de la tutela judicial efectiva, la cual es un derecho fundamental. En España por regla general existen dos tipos de acusadores, es decir, la acción penal puede ser ejercida tanto por el Ministerio Fiscal (acusador público), como por un acusador particular; este último a su vez puede ser un (i) acusador privado, aquel directamente afectado, o (ii) un acusador particular, cualquier ciudadano que actúe en pro del interés general.</p> <p>Tanta es la importancia de esta figura, que de acuerdo a lo descrito por Mendoza, D. (2018) en el Artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de este país, se estipula que <i>“la acción penal es pública y que todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla teniendo en cuenta la ley. Los únicos que no pueden ejercer la acción penal son aquellas personas que están privadas de la plenitud de sus derechos civiles”</i>, para complementar esto, el artículo 105 menciona que <i>“los funcionarios del Ministerio Fiscal deben ejercitar todas las acciones penales que consideren procedentes, haya o no acusador particular en las causas, menos aquellas que el Código Penal reserva exclusivamente a la querrela privada”</i>.</p>

**Fuente:** La figura del acusador privado en el Sistema Penal Colombiano a la luz de los derechos fundamentales. D. Mendoza, 2018.

Teniendo en cuenta lo anterior, la figura del acusador privado en estos países surge como un mecanismo compendioso, dirigido a la resolución de controversias donde se ven involucradas conductas punibles de menor lesividad, haciendo posible que los directos afectados se involucren activamente y así garantizar su derecho al acceso a la administración de justicia y a la celeridad procesal.

De otro lado, las reformas penales, alineadas a la Constitución Política que rige en cada uno de ellos, existe con el objetivo de suplir la necesidad de administrar justicia, dar



celeridad y generar descongestión en el ámbito procesal penal. Asimismo, se evidencia que la titularidad de la acción penal por regla general pertenece al Estado, ante quien se solicita la conversión y tiene poder facultativo de otorgar o no, la autorización al directamente afectado, quien es el legitimado y se define según los parámetros estipulados en cada país para constituirse como acusador privado.

La conversión de la acción penal se aplica sobre delitos de menor lesividad y faltas (Perú), los cuales no tiene medida privativa de la libertad (cuando no hay reincidencia en el hecho punible).

Finalmente, se puede decir que el acusador privado, funge como un mecanismo generalmente excepcional en los países antes mencionados, dirigido a garantizar los derechos de las víctimas y hacer más efectiva la justicia que promueve cada sistema penal. Es evidente que, la pretensión en cada Estado es propiciar un mecanismo que pueda concatenar lo sustancial con la realidad procesal que se vive en cada sistema judicial.

Afirmar que la implementación surja sin margen de error, es incurrir en un gran desacierto, sin embargo, asentir que es una alternativa de solución adaptable y modificable para satisfacer las necesidades y suplir los vacíos legales del sistema penal, es muy lógico y procedente en materia normativa, no solo en Colombia sino también en otros países siempre y cuando su génesis sea netamente constitucional, al menos en nuestro Estado Social de Derecho en concordancia con el artículo 4° de la Norma Superior .

#### **4. Fundamento normativo de la Ley 1826 de 2017 en Colombia.**

En el año 2007 al expedirse la Ley 1153 relacionada al tratamiento de las pequeñas causas en materia penal, se permitía trasladar el ejercicio de la acción penal a la Policía Nacional sobre las contravenciones contempladas en los artículos 27 al 33, pertenecientes

al Título II de la misma ley; disposición que fue declarada inconstitucionalidad a través de la sentencia C-879 de 2008. A juicio de la Corte:

La Ley 1153 de 2007 surge como una respuesta para descongestionar el proceso penal consagrado en la Ley 906 de 2004, para atender los delitos de menor relevancia e impacto social, para lo cual define como contravenciones algunas conductas que en los Códigos Penales y de Procedimiento Penal eran clasificadas como delitos querellables, y establece un procedimiento expedito para su investigación y juzgamiento, no obstante su tratamiento se ubica en la esfera penal y si bien las pequeñas causas, llamadas formalmente contravenciones penales, desde el punto de vista material continúan teniendo todos los elementos de un delito, desde su descripción típica, pasando por el régimen de responsabilidad, hasta llegar a la pena misma, que puede ser privativa de la libertad. De tal manera que solo el nombre, no la sustancia permitiría diferenciar las pequeñas causas penales de los delitos.

Para subsanar lo anterior, fue reformado el artículo 250 de la Constitución Política referido al ejercicio de la acción penal en Colombia, a través del Acto Legislativo 06 de 2011, que sustentó la expedición del Decreto 379 de 2012, cuyo artículo 1 parágrafo 2º afirmaba que: “Atendiendo la naturaleza del bien jurídico o la menor lesividad de la conducta punible, el legislador podrá asignarle el ejercicio de la acción penal a la víctima o a otras autoridades distintas a la Fiscalía General de la Nación. En todo caso, la Fiscalía General de la Nación”.

Por este motivo, con posterioridad se aprobó la Ley 1826 de 2017 que conserva su vigencia hasta el momento, y procura por la categorización de las conductas punibles como delitos y contravenciones, a diferencia de la Ley 1153 de 2007.

Para sustentar la afirmación antes expuesta, se procedió a analizar cada una de las gacetas suscritas por el Congreso de la República, permitiendo entender el alcance de la Ley 1826 de 2017, como se muestra a continuación; donde se evidencia la esencia misma

de la figura del acusador privado y el fin con el que se instauró en el Sistema Penal Acusatorio colombiano.

#### 4.1 Debates Congreso de la República: Matriz de análisis previo.

El sentido dado por el legislador a las normas que expide, es un criterio hermenéutico que debe ser considerado a la hora de entender el alcance de las disposiciones que plantean reformas importantes a la administración de justicia.

Así las cosas, se procedió a la revisión de las gacetas del congreso y la construcción de una matriz de análisis para identificar el alcance dado a la figura del acusador privado. Los principales elementos fueron resumidos a continuación para su posterior análisis.

No. Gaceta	Motivos
<b>GAC.591-2015 – Proyecto de Ley.</b>	<p>“El tratamiento de conductas punibles de menor lesividad para la sociedad colombiana, ha sido un tema recurrente. (...) Muestra de ello son los más recientes intento para consolidar un modelo procesal penal que permita un tratamiento ágil y eficaz para la investigación y juzgamiento de esta conducta”. (Pág. 17, Par.1)</p> <p>“En general, las iniciativas tienen en común la filosofía de buscar un sistema que, garantizando el respeto de los derechos fundamentales de las partes involucradas, permita procesar de manera ágil y expedita a quienes <b>toman parte de conductas delictivas de frecuente ocurrencia en la comunidad, que congestionan el sistema judicial de manera notoria</b>” (Pág. 17, Par.2)</p> <p>“El intento recurrente de descongestionar el sistema judicial a través de la creación de un procedimiento especial compuesto por mecanismos ágiles y desprovistos de cualquier ritualidad, que permita ofrecer un trato diferenciado para conductas de menor lesividad. (...) Según datos aportados por la Fiscalía General de la Nación, hay un total de 273.987 procesos activos a 2015 por delitos querellables según inventario. Cabe notar que solamente en el año 2014 ingresaron 234.765 noticias criminales por vía de querella. (...) Los datos muestran que un 21% de todos los procesos penales que actualmente se encuentran activos se adelantan por delitos querellables”. (Pág. 17, Par. 3)</p> <p><b>“Frente a esta realidad, este proyecto busca descongestionar el sistema judicial a partir de la consagración de un procedimiento especial abreviado para aquellas conductas punibles de menor lesividad para la sociedad colombiana. Estas últimas conductas pueden ser delitos o contravenciones penales, categoría que se incorpora ahora a la parte especial del Código Penal colombiano, como desarrollo del artículo 19</b></p>

**de esta codificación; para ambas hipótesis, las contravenciones penales y algunos delitos que pese a generar un gran impacto en la sociedad suponen individualmente un grado reducido de afectación al bien jurídico, se diseña un procedimiento abreviado que haga más ágil su juzgamiento”. (Pág. 17, Par. 4)**

“Por ello, este proyecto consta de tres ejes fundamentales: (i) la caracterización de las conductas contravencionales en un nuevo libro tercero de la parte especial del Código Penal; (ii) la estructuración de un proceso bipartito para la investigación y fundamento de las mismas, y (iii) **la consagración de un sistema de conversión de acción penal que permita radicar en cabeza un particular las facultades de investigación y acusación penal cuando se trate de contravenciones penales”** (Pág. 17, Par. 5)

“(iii). Acusador privado: (...) La posibilidad de optar por una acusación privada es una de las instituciones que mayor provecho permiten sacar de los nuevos cambios procesales introducidos. La consagración de un procedimiento penal abreviado y la posibilidad de la conversión de la acción penal de pública a privada se encuentran íntimamente vinculadas **al intento por establecer un diseño procesal que permita un tratamiento más eficiente para las conductas punibles de menor lesividad”**. (Pág. 19, Par. 2)

“Ello explica por qué países vecinos (...) contemplan la posibilidad de otorgar la titularidad de la acción penal en conductas punibles de menor lesividad a autoridades, distintas a la Fiscalía (o la entidad pública encargada ordinariamente de la acusación). Estos ordenamientos tienen en común, no solo que contemplan mecanismos simplificados que permiten un tratamiento diferenciado para las conductas punibles atendiendo a su grado de lesividad social, sino también que ofrecen la posibilidad de “convertir” la acción penal de pública a privada dentro del marco del procedimiento especial previsto para aquellas conductas que son consideradas de menor lesividad o impacto social” (Pág. 19, Par. 3)

**“Siguiendo esta tendencia, este proyecto de ley establece la posibilidad de convertir la acción penal de pública a privada y con ello dar titularidad a un acusador privado que interviene mediante apoderado en el proceso penal”**. (Pág. 19, Par. 4)

**“Hoy ello es posible gracias a la aprobación del Acto Legislativo número 06 de 2011, por medio del cual se modificó el parágrafo 2° del artículo 250 de la Constitución, con el fin de permitir la posibilidad de que, atendiendo a la naturaleza del bien jurídico menor lesividad de la conducta punible, el legislador asigne el ejercicio de la acción penal a la víctima o a otras autoridades distintas a la Fiscalía General de la Nación”**. (Pág. 19, Par. 5)

“Una vez la desmonopolización de la acción penal mediante Acto Legislativo 06 de 2011, el Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Resolución Número 0111 de 20 de febrero de 2012, creó la Comisión Asesora para la Desmonopolización de la acción penal como una instancia de expertos para estudiar los cambios normativos y las dificultades de implementar y desarrollar la figura del acusador privado” (Pág. 19, Par. 8)

“Este proyecto recoge muchas de sus observaciones y sugerencias para

	<p>proponer un <b>sistema en el cual se respete el poder preferente de la Fiscalía General de la Nación pero se garantice una posibilidad real a la víctima de acudir directamente a la justicia para obtener una solución pronta y una participación inmediata</b>” (Pág. 19, Par. 9)</p> <p>“Indudablemente, la posibilidad de asignar la titularidad de la acción penal a una entidad distinta a la Fiscalía General de la Nación ha sido prevista por la Constitución únicamente para las conductas menos lesivas. Por esta razón, este proyecto toma como ámbito de aplicación de la conversión de la acción penal las contravenciones penales que, en su naturaleza, responden perfectamente a lo autorizado por la Norma Superior”. (Pág. 19, Par. 10)</p> <p><b>“(…) Una manifestación preferente otorgado a la Fiscalía General de la Nación, es la renuencia a que la conversión pueda operar de forma automática y a la consecuente exigencia de que el ejercicio de la acción penal siempre empiece en cabeza de la Fiscalía y sea ante esta autoridad que la víctima pueda solicitar la conversión. Es importante destacar, a propósito de este punto, que bajo ningún punto de vista el Estado está renunciando a la carga que le corresponde respecto a la investigación de las conductas que puedan revestir las características de una conducta punible, ni en consecuencia, pone en una situación desventajosa a la víctima o afecta sus derechos a la verdad, justicia y reparación. Es de notar que únicamente se contempla la conversión de la acción penal como una posibilidad para la víctima que así lo desee. Desde ninguna óptica se trata de una imposición; de ahí la clara exigencia de acuerdo mutuo entre los querellantes legítimos para ordenar la conversión”</b> (Pág. 19, Par. 10; Pág. 20, Par. 1)</p> <p>“Así las cosas, este proyecto entiende que el titular inicial y preferente de la acción penal sigue siendo la Fiscalía General de la Nación, aunque esta pueda ordenar su conversión y en consecuencia asignarla a algunos de los agentes descritos por el artículo 71 de la Ley 906 de 2004. Es decir, a los querellantes legítimos”. (Pág. 20, Par. 2)</p> <p>“Así como la querella es el baremo de gravedad a la hora de caracterizar a las contravenciones penales en contraste con los delitos, la figura del querellante legítimo es el modelo para determinar cuándo se puede ser acusador privado. Únicamente quien cumpla con las condiciones exigidas para ser querellante legítimo podrá ejercer la acción penal de forma privada, que como regla general, se refiere al sujeto pasivo de la conducta punible. Excepcionalmente, tal y como lo contempla el artículo 71, algunas autoridades pueden hacer de querellante legítimo y, en consecuencia, de acusador privado. (Pág. 20, Par. 3)</p> <p>“Ahora bien, una vez convertida la acción penal por parte de la Fiscalía y asignado a uno de los agentes legitimados para ejercerla, el acusador privado cuenta, en esencia, con los mismos deberes y facultades que la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, este es uno de los aspectos en que se ha tenido la mayor prudencia pues no puede obviarse el hecho de que hay actos de investigación complejos que vulneran gravemente derechos fundamentales y que bajo ningún punto de vista pueden ser facultativos de un particular en el modelo de Estado que nos rige.” (Pág. 20, Par. 4)</p> <p>“Por esta razón, una de las limitaciones más notorias a la capacidad</p>
--	--

	<p>investigativa del acusador privado tiene que ver con su sujeción a las disposiciones que rigen las facultades de la defensa en la investigación. De manera muy puntual destaca la prohibición expresa que este proyecto impone al acusador privado de realizar actos complejos de investigación que afecten gravemente derechos fundamentales (interceptaciones de comunicaciones, inspecciones corporales, registros y allanamientos, entradas vigiladas, diligencias de agente encubierto, etc.). Finalmente, en relación con las reglas que rigen el proceso del cual hará parte el acusador privado, es de notar que, inevitablemente, ha de regirse por el proceso especial abreviado diseñado para las contravenciones penales.” (Pág. 20, Par. 5)</p>
<p><b>GAC. 624-2015-Inf. Ponencia I Debate.</b></p>	<p>Informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley número 48 de 2015 Senado.</p> <p>A través de este Proyecto de ley: (...) “Se desarrolla la figura de la Acusación Privada, a través de la cual se desmonopoliza la acción penal en cabeza del Estado y se ofrece a las víctimas la posibilidad de ejercer la acusación directamente. La Fiscalía mantiene el poder preferente respecto de la acción penal y la víctima, como acusador privado, no está facultada para realizar actos complejos de investigación que afecten gravemente derechos fundamentales - interceptaciones de comunicaciones, inspecciones corporales, registros y allanamientos, entradas vigiladas, diligencias de agente encubierto, etc.” (Pág. 6, Par. 4)</p> <p>Desde el año 2000 cuando se expidió la Ley 599, Código Penal, se estableció que las conductas punibles se clasifican en delitos y contravenciones, sin embargo a ninguna de las conductas desarrolladas en el Código Penal se le dio la denominación de contravención. (Pág. 7, Par. 4)</p> <p>En el año 2007, se expidió la Ley 1153 “<i>por medio de la cual se establece el tratamiento de las pequeñas causas en materia penal</i>”, excluyendo a la Fiscalía para la investigación de delitos considerados como de menor entidad, esta ley fue declarada inexecutable por la Corte Constitucional, por desconocer el artículo 250 de la Constitución que para la época establecía en cabeza de la Fiscalía el monopolio de la acción penal. (Pág. 7, Par. 5)</p> <p>En el año 2011 se expidió el Acto Legislativo 06 y en su artículo 2º se estableció que: “<i>Atendiendo a la naturaleza del bien jurídico y la meo lesividad de la conducta punible, el legislador podrá asignarle el ejercicio de la acción penal a la víctima o a otras autoridades distintas a la Fiscalía General de la Nación</i>” (Pág. 7, Par. 6)</p> <p>“Como uno de los aspectos más importantes de la iniciativa, se regula lo establecido en el artículo 2º del Acto Legislativo 06 de 2011, permitiendo que la víctima asuma la condición de investigador privado, en el caso de las contravenciones penales y así lo solicite al Fiscal del caso para que en el término de un mes, verifique si es procedente o no la conversión de la acción penal, manteniendo la Fiscalía General de la Nación el poder preferente, estableciendo además la posibilidad de revertir la acción privada en cualquiera de las etapas procesales cuando sobrevenga alguna situación que así lo amerite.” (Pág. 7, Par. 13)</p>
<p><b>GAC. 742-2015-Acta Nº 10-15-Com-I-Senado.</b></p>	<p>La Secretaría le da lectura a la proposición positiva con que termina el informe de ponencia.</p>

	<p>Ponente Honorable Senador Roy Leonardo Barreras Montealegre: (...) “Es un proyecto sencillo pero eficaz, como un buen bisturí es un proyecto que va a resolver de muy buena manera un número muy importante de lo que hoy son delitos querellables que congestionan la justicia.” (Pág. 5, Par. 4)</p> <p>Consideración y votación de proyectos en primer debate: La presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Eduardo Enrique Maya: “señor Ministro vamos a tener oportunidad de escucharlo a usted señor Presidente y de aumentar todos los argumentos posibles para que este proceso como lo dice el señor ponente sencillo pero eficaz y yo digo que no es nada sencillo, es complejo y por eso nuestro propósito es aportar todos los elementos de juicio posibles para que de aquí salga un proyecto técnicamente bien elaborado, incluso como lo ordena la Corte Constitucional.” (Pág. 6, Par. 10)</p> <p>La presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Carlos Fernando Mota Solarte: “Entiendo que porque así se redactó días y se radicó. El objetivo de este proyecto señor Ministro lesionado Roy Barreras es crear un modelo procesal que garantice los derechos fundamentales de las partes involucradas, pero disminuye los términos en las diferentes etapas del mismo y se crea la figura del acusador privado para reemplazar la acusación que hace la Fiscalía General. (Pág. 6, Par. 12)</p> <p>Concede el uso de la palabra al honorable Senador Eduardo Enrique Maya: “Ministro, si la podemos mirar y claro el del acusador privado, doctor Roy, genera en nuestro sistema unas inquietudes, en la Ley Estatutaria de la Justicia, si mal no recuerdo, el artículo 6° está previsto del principio de la gratuidad de la justicia en armonía con el artículo 13 y 229 constitucional.” (Pág. 9, Par. 8)</p> <p>Vamos a establecer nosotros el del acusador privado para los señores asistentes y para los que oír por televisión este tema que es el acusador privado que yo contraté mi abogado para que haga o desempeñe el papel de fiscal, para estas causas menores cuando nosotros y es que vamos a dar el paso debemos establecer el acusador privado en todo el Sistema Penal Acusatorio, ahí yo creo que de pronto pisa el umbral encontraría el principio de la gratuidad de la justicia. (Pág. 9, Par. 9)</p> <p>Ponente Honorable Senador Roy Leonardo Barreras Montealegre: “no es una obligación, claro no se está imponiendo ninguna obligación al ciudadano y adelanto solamente un tema Senador Eduardo sobre el asunto de la gratuidad en la justicia claro no se le está vulnerando ese derecho al ciudadano; primero porque el ciudadano puede hacer uso de lo que hoy existe ir a la Fiscalía pero si quiere puede acudir directamente, quien pueda puede acompañarse su abogado pero también puede ir a los consultorios jurídicos. (Pág. 11, Par. 10)</p> <p>La Presidencia cierra la votación y por Secretaría se informa el resultado con 13 votos por el sí, en consecuencia, ha sido aprobada la proposición positiva con que termina el informe de ponencia.</p>
<p><b>GAC. 775-2015 Ponencia II Debate Senado.</b></p>	<p>Informe de primera ponencia comisión primera, para segundo debate: “El pasado 8 de septiembre se dio la discusión, votación y aprobación por unanimidad, del Proyecto de ley número 048 de 2015, en la Comisión Primera del Senado de la República, durante el desarrollo del debate se hizo claridad en torno a la importancia de la iniciativa, aclarando que este</p>

	<p>proyecto está encaminado a dotar de mayor agilidad los procedimientos que se consideran de menor entidad, no porque su impacto sea menor, sino porque reviste de mayor importancia para la víctima que para el mismo Estado.” (Pág. 2, Par. 13)</p> <p>“Durante el debate el ponente dejó claro, que éste proyecto busca contribuir con la descongestión judicial en dos vías, la primera, disminuyendo el número de audiencias del procedimiento penal ordinario y la segunda desarrollando la figura del acusador privado consagrado en el Acto Legislativo número 06 de 2011.” (Pág. 2, Par. 15)</p> <p>“Una de las principales inquietudes que se presentaron en el debate, es el acceso de las personas de menos recursos al investigador privado, frente a esto el ponente aclaró que la figura del investigador es optativa, quien tenga la posibilidad de acceder a esta lo puede hacer, quien no, puede acudir a la Fiscalía General de la Nación como en la actualidad, sin embargo una persona que no tenga los recursos para contratar un investigador privado y no quiera acudir a la Fiscalía, puede acudir a los Consultorios Jurídicos de las universidades, que podrán cumplir las mismas funciones que los apoderados para los efectos de la investigación privada.” (Pág. 2, Par. 16)</p>
<b>GAC. 843-2015 Concepto Jurídico Política Criminal.</b>	<p>“El Consejo Superior de Política Criminal considera que el Proyecto de ley número 48 de 2015 Senado, <i>“por medio de la cual se definen las contravenciones penales, se establece un procedimiento especial abreviado para ellas y se regula la figura del acusador privado,</i> es conveniente como estrategia para diferenciar la reacción del sistema penal frente a las contravenciones, dada su menor lesividad a los bienes jurídicos protegidos por medio del derecho penal. Así mismo, considera que la propuesta de regulación de la figura del acusador privado se ajusta al marco constitucional que la autoriza.” (Pág. 10, Par. 4)</p>
<b>GAC. 22-2016 Acta N° 32-15 Com.-I-Senado.</b>	<p>Honorable Senador Roy Leonardo Barreras Montealegre: “(...) Avanzó en esta plenaria en la aprobación de prácticamente todo el articulado de este proyecto de ley. (...) Y vale la pena recordarle a los colombianos que lo que han hecho ustedes compañeros senadores, es ofrecerle a Colombia un instrumento legal muy útil, que como aquí se explicó largamente agiliza los trámites procesales para tener cumplida justicia en lo que ha de llamarse pequeñas causas, que son múltiples delitos ciudadanos los que ofenden al ciudadano en la calle.” (...) “El hecho de que la víctima pueda hacer directamente la acusación facilita el proceso” (Pág. 9, Par. 16-17)</p>
<b>GAC. 409-2016 – Ponencia I debate Cámara.</b>	<p>Proyecto de Ley 48 de 2015 Senado, 171 de 2015 Cámara.</p> <p>“Dados los altos índices de congestión e impunidad que se presentan en el sistema penal colombiano, tal como lo evidencia, entre otros, el estudio del funcionamiento de los diez años del Sistema Penal Acusatorio, realizado por USAID, acerca del funcionamiento del aparato judicial a nivel penal, es de extrema urgencia aplicar mecanismos que fomenten y colaboren con la congestión del sistema. Para lograr dichos fines es necesario tomar las herramientas que nos presta el Estado; así, una de las instituciones jurídicas que estaban olvidadas, pero legitimadas en nuestro derecho, son las contravenciones. (...) Esta ley, más allá de introducir y determinar la existencia de las contravenciones penales en Colombia, también tiene un impacto grande a nivel penal procesal. Lo que se deriva de la introducción de un proceso penal abreviado y la privatización de la acción penal” (Pág. 13, Par. 14)</p> <p>“(…) Por otro lado, la labor de la Fiscal seguramente se verá beneficiada con la privatización de la acción penal. Esto, en tanto la carga de casos a</p>



	<p>cargo de un solo Fiscal tiene que disminuir y además le da una participación más activa a la víctima dentro del proceso. Así, se supone que si es la misma víctima la que ejerza la acción penal, esto implica un mayor compromiso de la misma, pues es la mayor interesada. Por consiguiente, las investigaciones dentro de la indagación se realizarán de manera más rápida, lo cual deriva en la agilización del proceso penal.” (Pág. 13, Par. 16)</p> <p>“Así, las facultades del investigador privado, enmarcadas en el artículo 555 del proyecto de ley, cabe mencionar que no hay claridad respecto de los actos complejos de investigación. Lo anterior en la medida que si bien es claro que el investigador privado no podrá realizar dichos actos, surge la duda si estamos ante una omisión legislativa parcial. Por qué, no se menciona nada acerca de la posibilidad de que el investigador privado, en caso de que necesite la realización de un acto complejo para probar un hecho, pueda acudir ante la Fiscalía. Es decir, el proyecto de ley debería ser más claro frente a este punto, y determinar si una vez se adquiere la calidad de investigador privado y se necesita la realización de un acto complejo, este puede ser solicitado a la Fiscalía para que este lo realice, o si por el contrario, se pierde la facultad de poder realizar un acto complejo dentro del proceso.” (Pág. 15, Par. 6)</p> <p>“En caso de que el investigador privado no pueda realizar actos complejos por su cuenta a través de la Fiscalía, esto podría resultar en un desincentivo para la víctima, en tomar el papel del fiscal dentro de caso. Lo anterior, porque parte de una desventaja respecto de la labor investigativa que podría realizar la Fiscalía. En este sentido, si lo que se pretende es entregarle la facultad a personas naturales de ejercer la acción penal, deben dársele todas las garantías para que la pueda ejecutar como si fuera el mismo Estado quien ejerciera la acción. En este orden de ideas, las posibles soluciones vendrían siendo facultar al investigador privado a que realice actos complejos, o que en caso de que se necesite la realización de uno de estos actos, se pueda realizar a través de la Fiscalía General de la Nación.” (Pág. 15, Par. 7)</p>
<p><b>GAC. 754-2016- Informe Subcomisión.</b></p>	<p>Modificaciones relacionadas con la implementación de la figura del acusador privado:</p> <p>“En otras palabras, mediante esa disposición se estableció una facultad para que la ley regule los términos en que procede la desmonopolización de la acción penal con la finalidad de que mediante la atribución de esa potestad al acusador privado, se optimicen, entre otros principios, el acceso a la administración de justicia de las víctimas, la eficiencia y celeridad de los procesos penales” (Pág. 3, Par. 8)</p> <p>“(…) La implementación de la figura del acusador privado, pretende contribuir a la descongestión y al mejoramiento operacional al interior del sistema procesal penal colombiano. En últimas, se persigue que las víctimas tengan acceso pleno a la justicia, toda vez que le permite gestionar la acción penal de ciertos delitos cuya persecución penal les representa un tema de gran interés. (Pág. 3, Par. 10)</p> <p>“A partir de lo anterior, a continuación se expone cuál es el cambio que se propone mediante el presente informe, en relación con el alcance de las facultades del acusador privado para ejecutar actos de investigación. Con ese propósito se abordan (i) los cambios propuestos frente al texto aprobado en el segundo debate y (ii) la justificación e importancia de adoptar las modificaciones sugeridas.” (Pág. 3, Par. 11)</p>

	<p>Facultades del acusador privado para ejecutar actos de investigación:</p> <p>En los casos en que la Fiscalía autorice la conversión de la acción penal de pública a privada, los acusadores privados quedan investidos transitoriamente de la función de persecución penal. En consecuencia, deberán adelantar tanto la investigación como la acusación del delito que estén encargados de tramitar. A partir de lo anterior, la modificación que se propone en este informe consiste en la definición de los actos de investigación que podrán ser ejecutados directamente por el acusador privado y aquellos que le están vedados por conllevar una afectación intensa de derechos fundamentales.” (Pág. 3, Par. 14)</p> <p>“En ese sentido, se considera conveniente que el acusador privado tenga las mismas facultades de investigación que actualmente son reconocidas a la defensa, para que, en consecuencia, no puedan ejecutar directamente aquellos actos de investigación que son complejos, por implicar graves afectaciones a distintos derechos fundamentales como los de intimidad personal y familiar, privacidad de correspondencia, hábeas data, inviolabilidad del domicilio, honra y buen nombre”. (Pág. 4, Par. 1)</p> <p>“Así mismo, en atención a la imposibilidad que tendría el acusador privado para la ejecución de actos complejos, esta propuesta sugiere la adopción de la adopción de la figura del apoyo judicial. La implementación de esta figura, según los términos expuestos en el siguiente informe, implica que el acusador privado deba solicitar la autorización previa del juez de control de garantías para que esa autoridad evalúe la legalidad, urgencia y proporcionalidad del acto de investigación complejo cuya autorización se solicita y para que, si decide aprobar su realización, ordene que sea la Fiscalía la que, de forma exclusiva, lo ejecute-2. (Pág. 4, Par. 2)</p> <p>“Igualmente, la propuesta prevé que una vez sea ejecutado el acto complejo de investigación por parte de la Fiscalía, el fiscal encargado de la coordinación de esa diligencia debe acudir ante el juez de control de garantías para solicitar el control de legalidad posterior que corresponda. Lo anterior con el fin de que una vez legalice el acto, los elementos materiales probatorios y la evidencia que haya sido obtenida en el acto complejo, pueda ponerse a disposición del acusador privado, con el pleno respecto de los parámetros establecidos por la cadena de custodia”. (Pág. 4, Par. 3)</p> <p>“En los términos expuestos, la presente propuesta se justifica en tanto garantiza el cumplimiento de los parámetros de protección de los derechos fundamentales que pueden resultar intensamente limitados con la ejecución de ciertos actos de investigación. Por un lado, respecto de los actos de investigación que no son complejos, se sugiere el establecimiento de un margen amplio de acción por parte del acusador privado –en los términos actualmente establecidos para la defensa, y por el otro, en relación con los actos complejos de investigación, esta propuesta establece el control de legalidad previo y posterior por parte del juez de control de garantías, con la finalidad de que esa autoridad judicial autorice la realización del acto complejo y ordene a la Fiscalía su ejecución”. (Pág. 4, Par. 5)</p> <p>“Por su lado, la ejecución de los actos complejos por parte de la Fiscalía, si así lo autoriza previamente el juez, permite que el acusador privado tenga</p>
--	---

	<p>acceso a la información útil para la investigación se pueda extraerse de esos actos complejos, pero a su vez obliga a que su práctica siga en cabeza de la administración de justicia.” (Pág. 4, Par. 9)</p> <p>“Tanto el control previo por parte del juez de control de garantías como la ejecución de actos complejos por parte de la Fiscalía se acompasan con el razonamiento que en su momento realizó la Corte Constitucional cuando estableció que la defensa no puede ejecutar ciertos actos de investigación en razón a las restricciones a los derechos fundamentales que representan”. (Pág. 4, Par. 10)</p> <p>“Finalmente, el control de legalidad que, de conformidad con esta propuesta, debe adelantarse en el momento posterior a la ejecución de los actos de investigación complejos, cuando así lo establezca el Código de Procedimiento Penal, permite conservar el mismo control de las actuaciones que actualmente establece se cuerpo normativo, cuando es la Fiscalía General de la Nación la entidad que lleva a cabo el acto de investigación.” (Pág. 4, Par. 12)</p> <p>“La propuesta conforme a la cual deberá haber control previo para las actuaciones que, por no ser complejas, pueden ser ejecutadas directamente por el acusador privado, busca preservar los derechos de los procesados y de los terceros. Ese control de legalidad se justifica en tanto el acusador privado es un particular o una entidad distinta de la Fiscalía que, en todo caso, no tiene competencia para ejecutar injerencias deliberadas en los derechos de terceros.” (Pág. 5, Par. 2)</p> <p>“El anterior razonamiento resulta válido si se tiene en cuenta que resulta acorde con lo establecido por la Corte Constitucional cuando declaró la exequibilidad de la expresión “sin que puedan oponer reserva”, contenida en el artículo 125 de la Ley 906 de 2004, sobre deberes y atribuciones especiales de la defensa en el proceso penal—. En esa ocasión, la Corporación indicó lo siguiente, al referirse a las actuaciones que están vedadas para la defensa:</p> <p>“[El imputado y la defensa] ni aun bajo una concepción absoluta sobre la igualdad de oportunidades, pueden pretender que se les reconozca a ultranza las mismas atribuciones asignadas al ente acusador y con el mismo alcance para afectar derechos fundamentales de terceros”. (Pág. 5, Par. 3)</p> <p>“En conclusión, el establecimiento de modalidades y controles a la realización de actos de investigación por parte del acusador privado busca maximizar la protección de derechos fundamentales de procesados y terceros sin sacrificar la celeridad y eficacia que se pretende optimizar con la implementación del mandato constitucional contenido en el Acto Legislativo 6 de 2011.” (Pág. 5, Par. 7)</p>
--	---

<p><b>GAC. 960-2016. P.L. 171-15C Ponencia II Debate Cámara.</b></p>	<p>Intervención Mauricio Pava Lugo: “El proyecto tiene en cuenta que hay conductas en las que el ciudadano tiene el poder dispositivo sobre la acción penal, por lo que propone la inclusión de la figura del acusador privado, constitucionalmente previsto mediante el Acto Legislativo número 06 de 2011. Adujo que sin duda, la comunidad requiere de una iniciativa legislativa que le permita obtener justicia en su cotidianidad, que le resuelva los conflictos que lo tocan a diario, de manera célere y eficiente. De esto modo, se descongestionaría en parte la administración de justicia. No obstante, se precisó que es importante tener en cuenta que la acción penal en manos de la víctima no supone una privatización del sistema judicial, es decir el acusador privado tiene límites, en cuanto la decisión sobre la delegación de la acción penal al particular (conversión) se encuentra en cabeza de la fiscalía, luego de observar determinadas condiciones como la naturaleza del delito o su posible conexión con una organización criminal; de igual manera, si el fiscal del caso advierte la necesidad de retomar la acción penal (reversión) puede hacerlo en cualquier momento del proceso” (Pág. 8, Par. 7 8)</p> <p>“Se mencionó la necesidad de que el aparato judicial contará con otros instrumentos jurisdiccionales que le permitan cumplir su cometido materialmente. Por ello se afirmó que el proyecto cumple con el propósito; acerca la justicia al ciudadano con metodologías inteligentes, abordando el problema de justicia en la idea de un proceso eficiente, que propugna por una pena segura y no por un aumento de penas.” (Pág. 8, Par. 9)</p>
--	---

**Fuente:** Elaboración propia basado en las Gacetas del Congreso de la República de Colombia, 2015 – 2016.

En efecto, con la matriz antes expuesta se constató que la iniciativa adelantada en el Congreso de la República fue aprobada por mayoría simple, de forma unánime; porque, a lo largo del trámite de ley, se presentó el proceso penal abreviado y especialmente la figura del acusador privado, como un mecanismo garantista, el cual permitía el cumplimiento de principios constitucionales y derechos fundamentales.

Lo anterior, no supone ausencia de inquietudes frente a la figura del acusador privado por parte de los honorables congresistas tales como: (i) la facultad de realizar actos complejos y urgentes, (ii) la desigualdad económica de las víctimas , ocasionando consecuentemente la vulneración al artículo 13 de la C.P. y, (iii) la vulneración del principio de gratuidad en la administración de justicia; donde gracias a estas, se generaron

proposiciones en pro de demarcar y complementar aspectos de esta figura, para que no fuera un intento frustrado de mecanismo eficaz para disminuir notablemente la congestión judicial, como lo fue en la Ley 1153 de 2007.

En conclusión, la figura de acusador privado fue minuciosamente estudiada y debatida con el fin de prevenir cualquier vicio de inconstitucionalidad. Permitiendo, que en el Título II *De la acción penal privada*, Capítulo Único, artículos 549-564 del Código de Procedimiento Penal, se estipulará taxativamente la caracterización, ámbito de aplicación, facultades y limitaciones de esta figura; haciendo visible que: (i) La titularidad de la acción penal radica preferentemente en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. (ii) Por medio de esta figura no se autoriza desmedidamente facultades que solo le son atribuibles a la Fiscalía, como es el caso de la realización de actos complejos, y (iii) se garantiza el acceso a este mecanismo a todos los ciudadanos; es decir, sea por medio de abogado de confianza, entidades autorizadas o por medio de los consultorios jurídicos en el caso de población con escasos recursos.

##### **5. Acusador Privado: Alcance y contenido de la Ley 1826 de 2017.**

Una vez fue aprobada de forma unánime la sanción de la Ley 1826 de 2017, previo análisis detallado en ambas cámaras del congreso, se dio vía libre a la institución de la figura del acusador privado; en pocas palabras, como un mecanismo ágil, que permite la descongestión judicial, específicamente en aquellos procesos radicados por hechos punibles de menor lesividad y contravenciones. Como consecuencia de esto, en la Ley 906 de 2004, actual Código de Procedimiento Penal, se introdujo el Título II *De la acción penal privada*, Capítulo Único, artículos 549-564.

De esa manera, la figura es entendida como el medio por el cual la persona directamente afectada, una vez reúna los requisitos para constituirse como titular de la acción penal, podrá poner en movimiento el aparato judicial, siempre y cuando la conducta punible con la cual haya sido afectada, se encuentre descrita taxativamente en el artículo 534 de la Ley 906 de 2004.

Vale la pena aclarar, que es obligación de la víctima actuar por medio de un abogado de confianza, sin embargo, al significar una disminución al patrimonio de la misma y que no todos los que han sido afectados tienen los recursos para asumir ese gasto, la ley permite que los consultorios jurídicos puedan actuar como representante de víctimas, es decir, de población con escasos recursos.

Es indispensable entender que las facultades del acusador privado no son automáticas, ya que la titularidad de la acción penal, siempre estará en cabeza de la Fiscalía General de la Nación de forma preferente. Por lo que, la víctima debe realizar una solicitud ante esta entidad, para que proceda la autorización de convertir la acción penal pública a privada.

Una vez se haya autorizado la solicitud, el apoderado del acusador privado debe tener claro, que no le es permitido adelantar de forma alguna actos urgentes o actos complejos, porque con el fin de salvaguardar la igualdad de cargas y los derechos fundamentales de las partes, esas facultades siguen recayendo exclusivamente en las autoridades que las adelantan en el procedimiento ordinario.

Asimismo, al aceptarse la conversión de la acción penal, el acusador privado contará con las mismas facultades del defensor en la etapa de investigación y acusación. Cabe recalcar, que si a consideración de la Fiscalía debe revertirse la conversión, esta se podrá llevar a cabo, porque es esta entidad quien sigue teniendo la titularidad de la acción.

Finalmente, del alcance y facultades dados a la figura del acusador privado, es importante resaltar que se desarrolla bajo dos controles, estos son: (i) frente a la conversión de la acción penal y (ii) frente a la realización de actos complejos. Respecto a la conversión, es un control previo que surge una vez se presente la solicitud de la misma, en donde la Fiscalía estudia que al aprobarla no sean vulnerados derechos fundamentales; y con relación a los actos complejos, es aquel que efectúa el juez de control de garantías, cuando es elevada ante él la solicitud por parte de acusador privado, una vez se apruebe la Fiscalía será quien los realice.

## **6. Jurisprudencia.**

Respecto a las decisiones de la Corte Constitucional frente al tema analizado en este trabajo, se puede decir que se divide en dos momentos, tomando como punto de partida la expedición del Acto Legislativo 06 en el año 2011, que en su artículo 2º establece que *Atendiendo a la naturaleza del bien jurídico y la menor lesividad de la conducta punible, el legislador podrá asignarle el ejercicio de la acción penal a la víctima o a otras autoridades distintas a la Fiscalía General de la Nación.*

Para mayor claridad, antes de este Acto Legislativo la única entidad pública que podía ejercer la titularidad de la acción penal era la Fiscalía, es decir, esta no podía renunciar a la misma y no había de ninguna forma la posibilidad de realizar la conversión de la acción penal. Sin embargo, una vez aprobado el este Acto Legislativo, si bien la titularidad de la acción penal permanece de forma preponderante en el Estado, con previa autorización de la Fiscalía la acción penal puede ejercerse por medio de un acusador privado.

Por ello, toda norma que preexistiera antes de este Acto Legislativo, debía tener bases constitucionales sólidas que respaldarán su aprobación, sin embargo esto no sucedió con la Ley 1153 de 2007, la cual fue declarada inexecutable por medio de la sentencia C-089 /08, donde la Corte Constitucional manifestó que:

A pesar de que las conductas definidas como pequeñas causas continúan siendo materia penal y tratadas como delitos, y que su sanción puede dar lugar a la privación de la libertad, la Ley 1153 de 2007 excluyó a la Fiscalía General de la Nación de la competencia para la investigación de los hechos, que conforme lo establece de manera clara, expresa e inequívoca el inciso primero del artículo 250 de la Constitución Política, la Fiscalía General no puede renunciar a ejercer la acción penal ni dejar de realizar la investigación penal frente a aquellos hechos que revistan las características de un delito, sin perjuicio de la institución de la querrela, asignándole las funciones de investigación e indagación a la Policía Nacional frente a las contravenciones penales, que siguen revistiendo las características de un delito, lo que contraría el artículo 250 Superior.

Diferente es el caso de la Ley 1826 de 2017, que en vigencia del Acto Legislativo 06 de 2011 se propició desde su trámite e implementación su asiento constitucional, es decir, en el artículo 250 de la Carta Magna. Por lo que, a pesar de ser objeto de demandas de inconstitucionalidad, no se ha logrado que la Corte proceda con dicha pretensión.

Un ejemplo de lo anterior, es la Sentencia C-016/18, a través de la cual la Corte Constitucional se declaró inhibida por ineptitud sustantiva de la demanda, donde los demandantes presentaron acción pública de inconstitucionalidad contra el articulado comprendido en el Título II de la ley antes mencionada; dado que, en su interpretación el artículo 250 no autorizaba excepcionalmente la conversión de la acción penal de pública a privada, lo que daba lugar a la “privatización de la justicia penal” generando así una



violación a la Norma Superior, directamente en el monopolio de la acción penal en cabeza de la Fiscalía.

No obstante, tanto la Fiscalía como el Procurador General de la Nación coincidieron en que la demanda no cumplía con los requisitos de “*claridad, especificidad, pertinencia y suficiencia*” para respaldar los cargos de inconstitucionalidad presentados por los demandantes; generando consecuentemente la solicitud ante esa Corporación de declararse inhibida para pronunciarse de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda y la exequibilidad del articulado demandado.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte Constitucional decidió declararse inhibida para pronunciarse de fondo, dando continuación a la exequibilidad y vigencia del Título II de la Ley 1826 de 2017, basándose en que:

El principal problema que surge de lo expuesto radica en que la existencia de este contenido normativo desvirtúa la premisa esencial del escrito de demanda: el Estado tiene el monopolio de la acción penal, y esta se encuentra en cabeza de la Fiscalía, tal como indican los accionantes, pero existe una excepción directamente establecida en la Constitución, que permite la conversión de la acción en privada, bajo estrictos supuestos. Al omitir esta información en la construcción del parámetro de control, los demandantes terminan por desconocer que una regla sólo se comprende adecuadamente con sus excepciones, especialmente, cuando estas se encuentran directamente plasmadas en la norma Superior. Este yerro se torna, además, insuperable, puesto que todos los argumentos de la demanda asumen que la excepción mencionada no es válida o, en otros términos, que el monopolio estatal de la acción penal es una regla absoluta, cuando el propio constituyente derivado decidió incorporar el supuesto excepcional en el artículo 250 de la CP. (Pág. 20, Par. 4-5)

## CONCLUSIÓN

Tras un previo análisis sobre la figura del acusado privado, se puede afirmar que ha tenido un alto grado de aceptación por todos los actores involucrados en el ámbito penal, constituyéndose no como una solución absoluta para garantizar el acceso a la administración de justicia, pero si como un mecanismo que permite avanzar de gran manera en la descongestión judicial y la celeridad procesal, que actualmente se presentan como una de las muchas problemáticas que aquejan el aparato judicial.

Por esa razón, se define como una herramienta que el mismo Congreso provee para tratar de subsanar las fallas legislativas que caracterizan al sistema penal acusatorio, donde en muchos casos deja como resultado la sensación de impunidad en las víctimas de hechos punibles, en especial en las que se denominan de menor lesividad o contravenciones.

Como se pudo observar, existen figuras análogas introducidas en los modelos penales de otros países, por lo que esta figura no es nueva y da muestra que su inclusión en el sistema penal significa un elemento clave en pro de contrarrestar los altos índices de congestión judicial.

Lo anterior, por medio de la reducción de audiencias y la potestad dada a la víctima de adelantar la investigación y acusación contra quien ha vulnerado sus derechos, esto obviamente con previa autorización de la Fiscalía y habiendo cumplido los controles que enmarcan el desarrollo de esta figura.

Para ir finalizando, vale la pena resaltar que el legislador acertó en esta Ley, apostando no tanto a la emisión excesiva de normas sustanciales, sino más bien a la de normas de carácter procesal, ya que estas en la realidad son las que mueven el aparato judicial y se permiten hacer posible la celeridad procesal y paralelamente el acceso a la administración de justicia. Una prueba de ello es los diferentes procesos que se han

adelantado bajo este proceso penal abreviado y la no procedencia de demandas inconstitucionales en contra de la figura del acusador privado.

## BIBLIOGRAFÍA

Balcázar, L. (s.f). *El nuevo procedimiento penal abreviado dispuesto por la Ley 1826 de 2017 como mecanismo para aliviar la congestión judicial en Colombia*. Recuperado de:

<https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15036/1/El%20nuevo%20proc%20penal%20abreviado%20dispuesto%20por%20la%20Ley%201826%20de%202017.pdf>

Congreso de Colombia. (07 de marzo de 1996). Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. [Ley 270 de 1996]

Congreso de Colombia. (1 de septiembre de 2004). Ley por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. [Ley 906 de 2004]. DO: 45.658. Recuperado de:

[http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_0906\\_2004.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004.html)

Congreso de Colombia. (12 de enero de 2017). Ley por medio de la cual se establece un procedimiento especial abreviado y se regula la figura del acusador privado. [Ley 1826 de 2017]. DO: 50.114

[http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1826\\_2017.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1826_2017.html)

Correa, M. (2018). *De la acción penal pública a privada: implementación de la figura del acusador privado en el ordenamiento colombiano*. Recuperado de:

<https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/37807/DE%20LA%20AC>

[CIO%CC%81N%20PENAL%20PU%CC%81BLICA%20A%20PRIVADA%20IMP  
LEMENTACIo%CC%81N%20DE%20LA%20FIGURA%20DEL%20ACUSADOR  
%20PRIVADO%20EN%20EL%20ORDENAMIENTO%20COLOMBIANO.pdf?seq  
uence=4&isAllowed=y](#)

Corte Constitucional. (10 de septiembre de 2008). Sentencia C-879-08. [MP. Manuel José Cépeda Espinosa]

Corte Constitucional. (14 de marzo de 2018). Sentencia C-016-18. [MP. Diana Fajardo Rivera]

Garzón, D. et al. (2017). *Manual nuevo Procedimiento Penal Abreviado y Acusador Privado*. Recuperado de: <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/manual-nuevo-procedimiento-abreviado/>

Gobernación del Atlántico. (2017). *El Procedimiento Penal Abreviado y la figura del acusador privado Ley 1826 de 2017*. Recuperado de: <http://www.protransparencia.org/wp-content/uploads/2017/12/EL-PROCEDIMIENTO-PENAL-ABREVIADO-Y-LA-FIGURA-DEL-ACUSADOR-PRIVADO-LEY-1826-DE-2017-VF.pdf>

Marino, D. (s.f). *Diagnóstico de la operatividad del Sistema Penal Acusatorio en el Distrito Judicial de Barranquilla 2010-2016*. Recuperado de:

<http://www.protransparencia.org/wp-content/uploads/2017/12/DIAGNOSTICO-2010-2016-v-final.pdf>

Mendoza, D. (2018). *La figura del acusador privado en el sistema penal colombiano a la luz de los derechos fundamentales*. Recuperado de:

[http://repository.ucc.edu.co/bitstream/ucc/6764/1/2018\\_figura\\_acusador\\_privado.pdf](http://repository.ucc.edu.co/bitstream/ucc/6764/1/2018_figura_acusador_privado.pdf)

Ramírez, J. (2019). *Estado Social y Democrático de Derecho: Una realidad política, jurídica, económica y sociológica para la garantía y protección los derechos fundamentales*. Recuperado de: <https://www.urosario.edu.co/Revista-Nova-Et-Vetera/Omnia/Estado-Social-y-Democratico-de-Derecho-Una-realid/>